



El Aromo

UNA PUBLICACIÓN DE VÍA SOCIALISTA

EXPLOTA
EXPLÓTAME
EXPLÓ



Sumario

Política: La última apuesta de Cristina.

Economía: Cómo exportar calzado y no morir en el intento.

Clase obrera: Qué hacer y qué no hacer con la ANSES.

Inseguridad: El origen del problema y una solución real.

Educación: Para embrutecer, no hay grieta.

Las leyes de la burocracia sindical.

Clásico: ¿Puede un estado administrar la economía?

¿Cristina contraataca?



Fabián Harari

Vía Socialista

La dramática crisis actual puede resumirse en dos palabras con las que se machaca una y otra vez: gasoil y bonos en pesos. La primera, el síntoma de un agotamiento. A pesar de los aumentos de los productos agrarios, al país le faltan dólares para comprar algo tan esencial como la energía. Energía que no produce, que bien podría producir, pero no lo hace. No la produce y no la puede comprar tampoco, porque la economía no genera los dólares necesarios (es decir, no es lo suficientemente competitiva), pero también porque la ha venido regalando a los empresarios. A los subsidios inaugurados luego del 2002, hay que sumarle la sobrevaluación del peso, en algunos años, y el desdoblamiento cambiario, que es la estrella de esta administración. Mientras el peso que cobra cualquier mortal se pulveriza al punto de convertirse en papelitos para los hinchas brasileños, las empresas de energía y sus clientes operan con dólares “regalados”.

¿Regalar energía a las industrias es una medida equivocada? No necesariamente. Si ese estímulo inicial, esa pequeña “trampa” al mercado, permite a las empresas reestructurarse, aumentar su escala y volverse competitivas (es decir, ponerse a tono con la productividad mundial) ese subsidio se transforma en una inversión redituable al conjunto del sistema. Esos dólares puestos al principio se recuperan al final. Pero no es ese el caso. Acá, los subsidios no tienen por función estimular ni invertir, sino simplemente mantener con vida a empresas y ramas enteras atrasadas. Es como prestarle plata a un jugador o a un adicto. Por lo tanto, al final del camino, no hay más dólares, sino un agujero más grande. El desbarranco que provocó la suba del gas a partir de la guerra en Ucrania y el proceso inflacionario mundial muestran no sólo la anemia del capitalismo argentino, sino cuán frágil es la estructura que se había armado.

Si el gasoil es el síntoma de un problema de estructura, los bonos en pesos permiten entender su movimiento en el tiempo. Es un capítulo de la historia de las formas que encontraron los gobiernos para “tapar” el problema en las últimas décadas. Néstor y Cristina, con la renta de la soja (previa devaluación de Duhalde). Cuando esta comenzó a bajar, Cristina fue a pedir plata afuera (Club de París). Macri, como sabemos, profundizó esa estrategia y le sacó todo el jugo posible. Como no le alcanzó, empezó a pedir localmente (Leliqs), lo que se llama “deuda en pesos” (y que Cristina tanto subestimaba el año pasado). Alberto, también heredero, se encontró con un escenario similar. Sin crédito afuera, multiplicó los bonos en pesos hasta armar un verdadero festival y una verdadera bomba de tiempo.

Esos bonos empezaron como un instrumento para financiarse en pesos sin emitir y, con el aumento de la inflación, se fue pagando una tasa cada vez mayor. Sin embargo, la inflación desbocada obligó a utilizarlo para el fin opuesto: secar de pesos el mercado a corto plazo. Claro que ese agujero que relatamos más arriba, más el déficit fiscal, la devaluación, la inflación y la acelerada pérdida de reservas, llevó a que esos títulos se devalúen cada vez más y que se comprometa su renovación. Ante este panorama, el tesoro



tuvo que empezar a rescatar esos bonos. ¿Cómo? Emitiendo. Ergo, de un instrumento para financiarse y/o retirar pesos, se transformó en una demanda de financiamiento, en una vía de mayor emisión y en un acelerador de la debacle del peso. En septiembre será el vencimiento más importante del año para un gobierno que tiene reservas líquidas negativas. Las opciones son un nuevo respaldo del conjunto de la burguesía con la expectativa de llegar a 2023, una negativa, con un derrumbe generalizado, una expropiación de los depósitos (plan Bonex) o una combinación de los tres.

Guzmán lo sabía, Cristina también. No hay forma de llegar a esta instancia con buenos números. Si depende de la economía, el resultado es un aplazo. Por eso, tal vez, el primero renunció. Pero no siempre esa es la única razón, sobre todo en movimientos de corto plazo. En medio de semejante crisis social, un dirigente que logre demostrar capacidad de liderazgo político en medio de la tormenta, puede conseguir el apoyo y la apuesta de su clase. Por eso, Cristina se lanzó al centro de la escena como no la habíamos visto en estos dos años y medio. Luego de una serie de conversaciones nacionales e internacionales, emblocó a gobernadores, intendentes y a la CGT. Sacó del medio a Kulfas y a Guzmán (ella misma lo confesó, cuando posteriormente dijo que ya “no iba a revolver a ningún ministro”). Le quitó todo el apoyo a Alberto (salvo el Evita) y terminó de marginar a Massa y su gente. Es cierto que Scioli y Batakis no son de su exclusivo riñón, pero fueron consensuados con ella frente a las opciones de sus contrincantes. Su plan “ajuste + platita” implica tratar de poner todo lo que haya que poner para garantizar el conurbano, sin que el país estalle y sin que Alberto renuncie. Es una apuesta difícil. Demasiadas variables muy endebles en juego. Su otra propuesta, el Salario Básico Universal, tiene más de elemento de centralización política que de asistencia. De acuerdo al proyecto, se eliminan las intermediaciones de las organizaciones sociales y todo queda en manos de la ANSES. Ergo, quien maneja esa caja, maneja todo. Es cierto que a los intendentes y a los gobernadores les elimina unos competidores en el territorio, pero también es cierto que los obliga a ocicar ante quien controla los fondos. El proyecto puede ser una apuesta a la centralización, pero también derivar en un desbarranco, ya que esto insume dos puntos del PBI en momentos en que el gobierno quiere evitar el descalabro. Por último, también es cierto que, de prosperar, Cristina tendrá el control de toda la ayuda social, pero si el peronismo pierde las elecciones, no solo ella sino todo el movimiento se va a quedar sin nada.

Hay dos motivos por el cual quien parecía repudiada por todo el aparato, se postula para liderarlo una vez más. El primero es el vacío político que ha generado la crisis, que permite que personajes como Milei (o incluso Macri) tengan su abril. A pesar de tener enfrente un gobierno groggy, la oposición no logra estructurarse ni tomar la iniciativa. El segundo es un elemento que no debe dejar de ponderarse en estos casos: su experiencia y arrojo político. Pocos están dispuestos a ocupar el centro de la

escena. Ella sí, y estas cosas la burguesía las valora, porque proponer un ajuste no es cambiar variables en un Excel, es enfrentar un proceso de convulsión social. Poco a poco, ella parece postularse para ese lugar de “bestia negra” que pide Milei. Siempre fue la gran enemiga de la clase obrera y esta ocasión no será la excepción.

Si miramos el cuadro en función de los grandes problemas y las grandes soluciones, todo lo que presentamos acá es una comedia de enredos. Nadie sabe cómo sacar al país adelante y a ninguno le importa. Solamente piensan en sobrevivir y en ganar una elección que les va a entregar el gobierno de un país que no sabrán manejar. La crisis puede llevar a un estallido o sostenerse en una debacle insostenible. Incluso, la caída puede dar lugar a un rebote, pero para volver a caer. Ninguno de los problemas se va a solucionar con esta estructura. Volvamos al principio: solo una economía fuerte, que no requiera constantes y crecientes subsidios, que no tenga “agujeros” que tapar, puede evitar la pérdida de la moneda, el deterioro de los salarios, la desocupación y la degradación de la vida. Esa economía requiere un desarrollo que no se va a conseguir apelando a los empresarios parásitos. Será necesario que el Estado tome en sus manos la planificación y la centralización en las ramas más importantes y promisorias. Del festival de subsidios al festival del bienestar. Una economía socialista: fuerte y con todos adentro. Ese es el plan general. En este número, como en los anteriores, el lector va a encontrar adelantos concretos.

Sumá tu apoyo

Vía Socialista es un partido con una propuesta concreta de gobierno para llevar adelante y que es resultado de muchos años de trabajo. Se llama Argentina 2050. Con este programa aspiramos a un país que vuelva a crecer y alcance una productividad coreana y un nivel de vida sueco.

No buscamos una candidatura testimonial de oposición ni queremos apenas instalar un legislador o una figurita pública. Por el contrario, consideramos que podemos gobernar y llevar adelante un programa socialista que desarrolle el país. Así, planteamos que el socialismo es posible, ahora.

Para llevar esta propuesta a las próximas elecciones, necesitamos conseguir la legalidad como partido. Para eso necesitamos, sobre todo, afiliaciones. Podés hacerlo directamente online en el siguiente link:

<https://viasocialista.com.ar/afiliacion/>

Podés descargar gratuitamente nuestro programa Argentina 2050: <https://viasocialista.com.ar/category/argentina-2050/?fbclid=IwAR2FeIKZ0uV0Db34x8uSk-MO4SsTL9oUkUNmrjXSAWDzTKXTneIoOeK8UQIc>

El Aromo

Nueva Época. Año I, n° 2. Junio 2022.
Buenos Aires. ISSN: 1851-1813.

Editor Responsable: Fabián Harari.

Diseño de interior: Luciano Martin.

Diseño de Imagen: Leandro Albin, Federico Cantarelli.

Equipo Editorial: Eduardo Sartelli, Marina Kabat, Romina De Luca, Rosana López Rodríguez, Ianina Harari, Nicolás Villanova, Mariana Fennema, María del Rosario Toro Tesini, Ezequiel Flores, Guido Lissandrello, Gonzalo Sanz Cerbino, Hernán Calisaya, Dolores Martínez González, Damián Bil, Roberto Muñoz, Nicolás Grimaldi, Martín Pezzarini.

Redacción: Salcedo 2654, CABA, CP: 1259.

Contacto: argentinasocialista2050@gmail.com

El desafío que ni liberales ni peronistas superaron

Un proyecto para la exportación de calzado



Martin Pezzarini y Marina Kabat

Vía Socialista

Vender cueros para comprar zapatos es mal negocio. Desde Pinedo a Antonio Cafiero muchos quisieron cambiar ese comercio. Aquí explicamos cómo triunfar donde ellos fracasaron y la potencialidad de ese emprendimiento para la economía argentina en términos de divisas y empleos.

El empleo

En 2020, la fabricación de calzados y partes requirió 15.444 puestos de trabajo registrados. Este es el último año del que se tiene información. Esa cantidad de puestos marcó el punto más bajo que se registra desde 1996, y llegó como resultado de un período de expulsión de trabajo que se inició en 2012.

De acuerdo con un informe publicado por el Estado Nacional, en 2018, el empleo no registrado en la fabricación de calzados fue del 54%. La misma fuente estima que este índice es persistente; se calcula que no hubo grandes cambios en los últimos años. Aunque lo ocurrido en diversos sectores podría apuntar a un crecimiento del empleo en negro, haremos estimaciones asumiendo un 55% de empleo no registrado. Eso significa que, en el año 2020, cuando menos empleos demandó, la fabricación de calzados precisó de 33.500 puestos de trabajo (15.400 registrados y 18.100 no registrados). En cambio, en el año que más trabajadores empleó, 2011, requirió 73.000 puestos (33.600 registrados y 39.400 no registrados).

Las divisas

En 2021, Argentina importó 20.578.017 pares de zapatos, lo cual supuso un gasto de 265.072.800 millones de dólares. La producción local se situó en 106.500.000 pares y las exportaciones alcanzaron los 109.457 pares, lo cual generó el ingreso de 2.737.314 dólares. Ese año, la cantidad de pares de zapatos exportados apenas equivalió al 5% de los pares importados. Medidas en dólares, las exportaciones solo equivalieron al 1% del gasto que implicaron las importaciones.

El consumo aparente es una aproximación de las ventas al mercado interno y se calcula como la suma de la producción más las importaciones menos las exportaciones. En el año 2021, el consumo aparente de nuestro país fue de 126.968.560 pares de zapatos. Considerando la cantidad de habitantes (45.808.747), el consumo per cápita fue de 2,8 pares por persona.

La potencialidad

En 2019, un año antes del comienzo de la pandemia, que afectó profundamente la actividad del sector, la fabricación de calzados precisó aproximadamente 17 mil puestos de trabajo registrados y 20 mil puestos no registrados, los cual suma un total de 37 mil puestos.

En ese mismo año, según la Cámara de la Industria del Calzado, la producción local fue de 81.000.000 de pares. Esto quiere decir que, en promedio, en cada puesto de trabajo se produjeron 2.184 pares de zapatos. Siempre en el mismo año, 2019, las importaciones alcanzaron los 22.252.682 pares de zapatos, el consumo aparente se ubicó en 103.358.359 pares y el consumo per cápita en 2,3 pares por persona. Si todos los pares de zapatos consumidos en Argentina (103.358.359) se hubieran producido en el propio país, se hubieran requerido un total de 47.318 puestos de trabajo, es decir, 10.235 puestos extras. Y, además, se hubieran ahorrado más de doscientos millones de dólares en importaciones.

Si además de producir esa cantidad correspondiente al consumo interno (103.358.359), Argentina exportara el equivalente al 25%, el país hubiera producido un total de 129.197.949 pares de zapatos, la fabricación de calzados hubiera demandado un total de 59.149 puestos de trabajo (lo cual son 22.066 puestos extras) y las ventas al exterior se hubieran ubicado en los 25.839.589 pares, reportando un ingreso de 568.123.252 dólares.

Esa cantidad de zapatos que se podrían haber producido para el consumo y la exportación (129.197.949 de pares) no supera la capacidad de la industria local. En efecto, en el año 2019, la utilización de la capacidad instalada en la industria (no hay una distinción específica para el sector de calzados) promedió el 59%, lo cual quiere decir que se podrían haber producido 137.288.136 zapatos.

El negocio que no supieron impulsar

¿Qué tienen en común Ministros de Economía liberales y peronistas como Pinedo, Miguel Miranda, Antonio Cafiero y Krieger Vasena?

Todos ellos quisieron fomentar las exportaciones de calzado. Todos ellos alcanzaron modestos éxitos iniciales, pero concluyeron con un rotundo fracaso. Los primeros pasos del proceso se anuncian con bombos y platillos. Se fotografían los embarques de calzado al exterior y se mira el porvenir con esperanza. Pero, algunos años más tarde (en algunos casos, algunos meses) la experiencia naufraga. Las exportaciones de zapatos caen a pique y en los escaparates de los países que nos habían comprado se colocan cartelitos con la leyenda “no vendemos zapatos argentinos”, en alusión a la defectuosa calidad de las partidas recibidas de nuestro país.

Políticas públicas que estimularan las exportaciones no faltaron. Casi podría decirse que se probó de todo: leyes de draw back, asistencia técnica, apertura de oficinas comerciales en los países compradores, creación de una institución mixta que promoviera las exportaciones industriales, tipo de cambio favorable...

¿Cómo triunfar donde todos fracasaron?

La estructura radicalmente dispersa y poco concentrada del sector es la causa de los fracasos anteriores. La indus-

tria del calzado es el reino del universo PyME. En 2018, 1136 firmas se dedicaban a la fabricación de calzados, el 96% de las cuales se ubicaban entre las micro y pequeñas empresas.

Con la política de promoción de exportaciones industriales nos hemos golpeado la cabeza contra la pared una y otra vez. Volver a estimular a pequeñas empresas privadas sólo añadirá un chichón más a la adolorida economía argentina. Las pymes simplemente no tienen la escala para ser competitivas. El volumen de importaciones nos muestra que su tamaño no alcanza siquiera para competir en su propio mercado. No hay forma de que pudieran hacerlo en el escenario mundial. Si bien, los distintos regímenes de promoción de exportaciones estimularon el incremento de la producción y hasta la creación de fábricas nuevas de mayor envergadura, aun así, no fue ni podría ser suficiente.

La solución está en concentrar la producción en una empresa mixta (estatal-privada) que pueda alcanzar la escala suficiente como para hacer competitiva nuestra producción. Exportar calzado en vez de cuero es indudablemente un buen negocio. Solo hace falta tener las agallas necesarias para tomar las medidas que la iniciativa requiere.

1.Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (OEDE, 2022). Disponible en línea en: <https://bit.ly/3AJAMyK>

2.Ministerio de Producción y Trabajo (septiembre, 2019). Argentina exporta. Calzado. Secretaría de Comercio Exterior.

3.Comtrade Database, junio de 2022. Disponible en: <https://bit.ly/2AFTho1>

4.Estimación realizada en base a información de: Comtrade Database (2022), op. cit. y Cámara de la Industria del Calzado (mayo, 2022), op. cit.

5.Estimación realizada en base a información de: Ministerio de Producción y Trabajo (2019). op. cit. y OEDE (2022), op. cit.

6.Cámara de la Industria del Calzado (2022), op. cit., p. 1.

7.Estimación realizada en base a información de: Ministerio de Producción y Trabajo (2019). op. cit. y OEDE (2022), op. cit.



¡Acá no labura nadie!

El modelo K para encubrir el desempleo y una salida posible



Nicolás Villanova

Vía Socialista

El kirchnerismo supo ocultar el desempleo mejor que nadie. Su estrategia fue esconder a los desocupados bajo la forma de jubilados, pensionados, empleo público y “planes”. Sin embargo, las limitaciones de esa política no se hicieron esperar: no sólo porque los subsidios son de miseria, sino porque el incremento de los beneficiarios de planes fue de la mano de un estancamiento de la creación de empleo. Para decirlo sin vueltas: no hubo una política estatal de creación de empleo productivo, sólo se tapó el desempleo con subsidios. En materia previsional, el kirchnerismo incrementó las jubilaciones por moratorias profundizando el quiebre de la caja previsional. En cuanto a los regímenes no contributivos, tanto Néstor como Cristina utilizaron este sistema para encubrir desempleo. Lo mismo hicieron con el lanzamiento de planes sociales y con el aumento del empleo público, pretendiendo hacernos creer que se creaba “empleo genuino”. Aquí analizamos estas tres estrategias, dejamos de lado un análisis de la evolución del empleo público para próximos números. Lejos de las recetas liberales, la solución al desempleo supone la reasignación de recursos, la planificación y la creación de un Estado productivo que emplee a millones de desocupados.

Caja reventada

La estrategia kirchnerista en materia previsional se basó en la incorporación de desocupados e informales al sistema contributivo a través de las moratorias, específicamente aquellos obreros de avanzada edad que le faltaran años de aportes. De este modo, no sólo se “quitaba” a potenciales desocupados del mercado de trabajo, también se “controlaba” estadísticamente las cifras de desempleo para no registrar como “sin trabajo” a un “jubilado inactivo”. Por estas moratorias de los años 2005 y 2014 ingresaron 3,2 millones de personas al sistema previsional, las cuales hoy constituyen un poco más de la mitad de los beneficiarios del sistema jubilatorio.

Los efectos de este proceso fueron: la profundización de la inviabilidad del sistema jubilatorio y la miseria de los haberes. En efecto, el sistema jubilatorio es deficitario desde antaño. Ya en los años '70 los aportes jubilatorios de los activos no alcanzaban a cubrir los pagos de los pasivos, en un momento donde crecía el desempleo y la informalidad, y la masa salarial se reducía notablemente. Era el inicio del agotamiento del sistema. Por su parte, la llegada del kirchnerismo al gobierno no hizo más que profundizar este proceso incorporando en el régimen jubilatorio a desocupados y obreros informales, sin resolver el problema de fondo. Con el paso del tiempo la relación entre aportante y beneficiario fue aproximándose: si en 2005 el índice de sostenibilidad era de 2,05 (por cada jubilado había dos aportantes al sistema), en 2012 esa relación se redujo a 1,61, y en 2021, a 1,44 (por cada dos jubilados hay tres aportantes). Una relación insostenible para cualquier sistema de reparto. A su vez, los bajos salarios de los obreros “en blanco” no son garantía de elevados aportes y contribuciones al fisco, toda vez que la suma de estos últimos representa un 26% promedio del salario bruto. Esto significa que, por ejemplo, los aportes y contribuciones de un asalariado registrado de la construcción garantizan 0,8 veces el valor de un haber mínimo y 0,5 veces (la mitad) el valor de un haber medio.

Las consecuencias en los haberes previsionales son obvias: una miseria. Aún cuando la caja de la ANSES hace varias décadas que no se sostiene sólo con aportes y contribuciones, sino que a eso se suman otros impuestos, los ingresos que se les paga a los jubilados son de pobreza: actualmente, el 63% de los beneficiarios del sistema contributivo, unos 4,2 millones de jubilados y pensionados con y sin moratoria, perciben la mínima, que al mes de marzo de 2022 era de 32.630,40 pesos (apenas cubría un 36% de la canasta de pobreza de una familia tipo). Como vemos, el modelo “k” reventó el sistema jubilatorio, no resolvió el problema del desempleo y agravó la situación social.

Que no se vea

Otra estrategia del kirchnerismo para encubrir desempleo fue la ampliación de las pensiones no contributivas (PNC), haciendo pasar a un desocupado como un “inactivo”, y el relanzamiento de los planes sociales en ocupaciones improproductivas, desligándose así de la solución a la desocupación. Al igual que la universalización de las jubilaciones, el sistema de PNC se impulsa en la década de 1940 y con el correr de los años amplía el ingreso de beneficiarios. Se trata de las pensiones por vejez, ex combatientes de Malvinas, las pensiones de leyes especiales (otorgadas a presidentes y vicepresidentes del país, jueces de la Corte Suprema, premios Nobel y Olímpicos, sacerdotes, obispos, familiares de desaparecidos, entre otros). De todas las PNC, la abrumadora mayoría corresponde a las “asistenciales” por invalidez, luego por madres de 7 o más hijos y a la vejez (hoy reabsorbida por la Pensión Universal para el Adulto Mayor impulsada por el macrismo durante la reforma del año 2016, administrada por la ya desfinanciada caja de la ANSES).

Hasta el 2003, los criterios de acceso a estos beneficios eran por “cupos” y atados al presupuesto nacional. Sin embargo, la llegada del kirchnerismo modificó los requisitos haciéndolos más flexibles: antes había que demostrar una incapacidad para trabajar igual o mayor al 76% para obtener una pensión asistencial por invalidez; mientras que, la llegada de Néstor flexibilizó ese criterio ponderando más la “vulnerabilidad social” y relativizando la falta de capacidad laboral. Es decir, el kirchnerismo transformó esa pensión en un subsidio al desocupado y en un seguro por desempleo al obrero informal despedido. Algo semejante ocurrió con la pensión para madres de 7 o más hijos, cuyas receptoras son desocupadas e indigentes.

El resultado es contundente: entre 2004 y 2015 la totalidad de las PNC pasaron de 363 mil beneficiarios a 1,5 millones. Las pensiones por invalidez pasaron de 89.407 a 1.058.835, representando en 2004 el 25% del total de las PNC, y en 2015, el 70%. Por su parte, los beneficios a las madres de 7 o más hijos se incrementaron de 64.654 a 332.880. No resulta casual que las provincias que perciben una mayor cantidad de PNC sean las más pobres y con mayor desempleo. En términos de porcentaje de beneficiarios sobre el total de la población, las jurisdicciones con mayor cantidad de pensionados para el mes de marzo de 2022 son las siguientes: Santiago del Estero (9,7%), Chaco (8,4%), Formosa (8%), Misiones (7,3%), Corrientes (6,4%), Salta (5,1%). A su vez, el kirchnerismo se encargó de que los montos percibidos fueran de indigencia. En marzo de 2022, la pensión por invalidez era de 23.261 pesos la cual cubría apenas un 58% de la canasta de indigencia de una familia tipo y un 26% de una canasta de pobreza. Por su parte, el monto pagado por la pensión a madres de 7 o más hijos, de 33.074 pesos, representaba un 83% del valor de la canasta de indigencia y un 37% del valor de la canasta de pobreza.

Aunque aquí no se agota el asunto, la estrategia de encubrir desempleo a través de la entrega de planes sociales en ocupaciones superfluas mantuvo la fórmula subsidio de miseria, “mejora” en las estadísticas de desempleo, conflictividad social atenuada. Si bien el kirchnerismo no inventó nada de esto, pues los planes sociales con contraprestación los impulsó Menem con la reforma laboral de inicios de los '90 y los profundiza Duhalde luego de 2001 con el Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados, lo cierto es que Néstor hereda esta estructura y reasigna recursos bajo otros subsidios (Familias por la Inclusión Social y Manos a la Obra). Si bien la cantidad de “planeros” merma en momentos de recuperación económica, esta tendencia comienza a revertirse a partir del lanzamiento del Plan Argentina Trabaja en 2009 (luego denominado Hacemos Futuro bajo el macrismo), Ellas Hacen (2013) y Proyectos Comunitarios (2017), todos ellos reabsorbidos hoy por el Potenciar Trabajo. A un año de su implementación, en octubre de 2010, el programa Argentina Trabaja llegó a los 143 mil beneficiarios. Al mes de diciembre de 2021 el Potenciar Trabajo llegaba a 1.276.705 personas, con montos promedio de 16 mil pesos los cuales cubrían tan sólo un 48,5% de la canasta de indigencia y un 21% de la

canasta de pobreza.

Como vemos, la estrategia y sus consecuencias son perfectamente visibles: tapar el desempleo con subsidios de miseria agravando la crisis social.

Una solución posible

El kirchnerismo no puede resolver el problema del desempleo. Gobernó por 12 años, ahora cogobierna en el Frente De Todos y tanto Cristina como Alberto son parte del problema. Con emisión y ajustando a la clase obrera registrada con más impuestos sólo lograron mayor pobreza y desocupación. Por su parte, los liberales lanzan recetas de fantasía: proclaman eliminar los planes de un plumazo o gradualmente y esperar a que algún empresario invierta para crear puestos de trabajo. El macrismo asume como válida esta opción. Todos coinciden en que sólo un ajuste y un ataque a las condiciones de vida de la clase obrera redundarían en una mejora del sistema. Pero, en ningún caso se resuelve el problema, toda vez que la solución queda supeditada a la voluntad de un empresariado que no quiere invertir en un país poco rentable, y al que sólo le interesa arañar algo de los subsidios que el Estado transfiere a la burguesía por la vía de los pocos dólares que ingresan a través del sector agrario y dos o tres empresas exportadoras.

Una solución real al problema del desempleo sólo puede planificarse a partir de la existencia de un Estado productivo, es decir, socialista. Con el empleo, en primera instancia, de un millón y medio de desocupados en empresas del Estado que produzcan mercancías exportables sin demasiada necesidad de calificación (puede ser piscicultura, cría de cerdos, material reciclable para producir energía). ¿Y cómo se financia todo esto? Para pensar el problema veamos algunos números. Proyectado a todo el 2022, el financiamiento de las pensiones por invalidez supone una erogación anual de 1.450 millones de dólares (a dólar blue actual), por madre de 7 o más hijos, unos 563 millones de dólares anuales, y el Potenciar Trabajo, unos 1.510 millones anuales. Sumados son unos 3.500 millones de dólares al año. Este monto representa un 1,6% del PBI (de 2021). O sea, poco y nada para una economía como la argentina. Suponiendo una inversión anual para dar empleo a la mitad de esa cantidad de beneficiarios (no todos son desempleo encubierto), algo así como 1,35 millones de personas, elevándole un salario a 75 mil pesos mensuales (muy por encima de lo que actualmente perciben), estamos hablando de unos poco más de 5.000 millones de dólares por año (un 2,6% del PBI). Otro tanto para los gastos de inversión en maquinaria y equipo (supongamos un equivalente a la masa salarial) y estamos hablando de un presupuesto del 5% del PBI, que es mucho menos de lo que representa el gasto público consolidado en previsión social. Pensemos que buena parte de ese gasto ya existe en la forma de subsidios, jubilaciones y pensiones improproductivas, por lo tanto, lo que hay que poner es bastante menos que esa cifra, probablemente unos tres mil millones de dólares. Una inversión de estas magnitudes en empresas estatales y productivas garantizaría empleo a millones de personas, elevaría sus salarios y ampliaría sustantivamente la caja de la seguridad social, con mejoras en las jubilaciones.



Ni garantismo ni mano dura, disciplina social

Cómo resolver el aumento del delito en Argentina



Fabian Harari y
Martín Pezzarini

Vía Socialista

Las rejas, las alarmas, las cámaras, las agencias de seguridad privada o un arma propia, según la posibilidad económica de cada uno, se transformaron en parte del paisaje cotidiano. La vida, en Argentina, se tornó más vulnerable. Quienes nacieron en este siglo pueden naturalizar la situación, porque no vivieron otra. Quienes tenemos un poco más de años, presenciamos, con horror, estos cambios. Sobre todo, porque esos fenómenos no describen un escenario, sino un movimiento. Dicho de otra forma: de seguir así, nos esperan cosas peores.

Cuando vamos a los diagnósticos y soluciones que nos ofrecen hasta ahora, nos encontramos con dos programas. El primero es muy conocido: la llamada “doctrina Zaffaroni”, que abarca un amplio campo que oscila entre negar el problema hasta sostener que el delito es una forma de “lucha de clases”. Según esta mirada, el delincuente es simplemente un desposeído que intenta conseguir, por la acción directa, el acceso a bienes que la economía le niega; se trata de una “guerra”, subterránea y cotidiana, contra los que lo poseen todo. Por lo tanto, la solución no es reprimir, sino “contener”.

El segundo programa también es conocido: la “mano dura”. Según esta mirada, la sociedad funciona muy bien, pero siempre hay gente que se “desvía”. El delito es una decisión individual que cada uno toma libremente. Por ende, si las leyes y la vigilancia del Estado pierden fuerza, los crímenes van a aumentar, que es lo que habría venido pasando en las últimas décadas. Entonces, la solución son leyes más restrictivas, procesos más cortos y con menores garantías procesales y un mayor despliegue del aparato represivo. En realidad, la solución no está en las leyes. Hay que buscarla en otro lugar.

El primer paso es medir el tamaño del problema. En el gráfico 1, podemos ver la notable expansión de la cantidad total de delitos en el país. En 1970 teníamos casi 270.000 y, en 2019, 1.765.000. Estamos ante un fenómeno muy considerable. Más aún si tenemos en cuenta que estamos hablando solo de los casos denunciados. Un estudio estatal que se realizó en 2017, consignó que se denunciaron solo el 53,5% de los delitos que se cometieron contra los hogares y el 33,3% de los delitos contra las personas. En cuanto a su evolución en el tiempo, vemos un incremento más bien paulatino y constante.

Se puede argumentar que el delito creció con la población. Pero en el mismo gráfico 1 podemos apreciar que la tasa de delitos cada 100.000 habitantes prácticamente se cuadruplicó. Para poner esta tasa en números más cotidianos, en un año, 2016, al menos 5,4 millones de personas fueron víctimas de algún delito. Si tomamos los homicidios dolosos (premeditados), desde el 2001 al 2019, han sido asesinadas 52.128 personas. Por lo tanto, estamos ante un problema serio, extendido y creciente. Con estas cifras, cuesta mucho creer que sea un tema menor o que sea solo un problema de los “ricos”.

¿De qué hablamos cuando nos referimos a los “delitos”? Básicamente, de robos y hurtos, que suman, a lo largo de las últimas tres décadas, algo más del 60% de los delitos totales. Seguramente ese porcentaje es mayor, porque se trata de hechos con menor propensión a ser denunciados (por ejemplo, frente los homicidios, que ocupan el segundo lugar). El predominio de estos delitos es lo que envalentona a los “garantistas” a hablar de los ladrones como verdaderos “luchadores” contra la propiedad privada. Para poder convalidar semejante delirio, habría que examinar, primero, a quiénes les quitan estos “justicieros”.

Toda la maquinaria estadística del Estado está puesta para averiguar quiénes son los imputados. Nunca le interesó a nadie saber sobre la condición de las víctimas. Solamente, en el año 2017 se realizó un estudio sobre el problema. Resultado: en 2016, de 3,5 millones de personas que sufrieron un robo o hurto, un tercio no tenía cloacas en sus casas y el 42% vivía en un hogar que no superaba la canasta básica total. Un poco más de un millón de hogares sufrieron algún robo. De esa cantidad, el 40% no tenía cloaca y el 45% ni siquiera alcanzaba a cubrir los gastos

comprendidos en la Canasta Básica Total que calcula el INDEC para cuatro personas. Ese escenario es aún peor en algunas provincias como Corrientes, Chaco, Formosa, Jujuy y Santiago del Estero, donde más del 60% de los hogares que sufrieron robos y hurtos (o tentativas) no cubren el valor de esa misma canasta. Si vamos a los hechos violentos, los barrios “vulnerables” de CABA contienen al 19% de la población, pero son castigados con el 40% de los homicidios del distrito en 2021. En 2020, sobre 120.301 delitos contra la propiedad, solo 30 fueron realizados contra casas en countrys o barrios cerrados. Los robos a los bancos prácticamente desaparecieron. En 2008, uno de los años con mayores hechos de este tipo, se registraron 47, sobre un total de 769.227 delitos contra la propiedad de ese año. Queda claro que la principal víctima de la delincuencia es la clase obrera. En particular, sus capas más sumergidas. Por lo tanto, el delincuente no es un justiciero. Es simplemente un parásito que vive de quitarle violentamente al obrero la poca propiedad que este tiene. Es un agente de la degradación de la vida social en general y de las condiciones de la clase obrera en particular. Un burgués tiene muchos más recursos para defenderse. Por eso, a mayor pobreza, mayor riesgo. El hecho de que el agresor haya salido del mismo lugar que sus víctimas no cambia el sentido del problema. No se puede asociar la delincuencia a la pobreza sin más, porque las víctimas son una aplastante mayoría frente a los agresores. Oponerse a reprimir el delito y dejar que todo se solucione espontáneamente no solo es una posición liberal extrema, sino que desnuda la posición de clase de quien la enuncia: Zaffaroni y compañía no sufren lo que sufre la clase obrera.

“Bien, entonces, hace falta mano dura”, parecen decir desde la otra vereda Berni, Bullrich y tantos otros. El problema es que, a pesar de todo el llanto de estos personajes, es lo que se ha venido haciendo sistemáticamente. Desde los años '90 hasta la actualidad, todos los gobiernos han incrementado el presupuesto en seguridad, salvo una leve caída durante el gobierno de Macri, (véase gráfico 2). Pero, también, creció notablemente la cantidad de personal abocado a ello. Por ejemplo, si tomamos todas las fuerzas destinadas a la seguridad (fuerzas federales y policías provinciales, excluyendo FF.AA., que no se dedican a esas tareas), nos encontramos que desde 1994 a 2015 se duplicó la cantidad de efectivos (de 214.821 a 429.658). Ahora bien, en relación a la población se pasó, en ese mismo período, de 637 efectivos cada 100.000 habitantes a 996, un aumento de casi el 50%. “Claro, se dirá, pero igual salen todos libres...”. Bueno, veamos entonces la cantidad de presos sobre la población en general. En el año 2000, teníamos 105 presos por cada 100 mil habitantes. En 2019, esa cifra subió a 223. Eso, tomando solo las cárceles (federales y provinciales). Si sumamos a las comisarías y alcaldías, la cifra para el último año llega a 243. Se puede decir que también habría que agregar esos detenidos al año 2000, pero su peso fue subiendo con el tiempo. Desde 2014, aumentó un 99% en el caso de las comisarías y un 182% en las alcaldías. Es decir, cada vez se pone más plata para equipar a cada vez más efectivos, para encarcelar cada vez a mayor cantidad de población, pero el resultado no cambia: cada vez hay más delitos.

Como vemos, la causa del aumento de la delincuencia no es “la pobreza” en general (Brasil y los EE.UU. son países con mayores índices), ni la “mano dura” sino un fenómeno diferente: la descomposición social y el crecimiento del lumpenproletariado. Es decir, la ruptura de relaciones sociales (económicas y morales) y el desclasamiento de una cantidad creciente de personas que pasan a engrosar las filas de grupos delictivos, con un grado de organización variable. Esa descomposición opera contra la población más desposeída y penetra en las organizaciones represivas. Por eso, la “mano dura” y la “mano blanda” no hacen más que multiplicarla. En otra entrega, vamos a dedicarnos a entender mejor ese mundo.

Por ahora, lo que nos importa es que el proceso en el que se inscribe ese fenómeno es el de la pérdida de una disciplina social. ¿Qué significa eso? Uno hace o deja de hacer cosas porque evalúa los límites que la sociedad impone. Por ejemplo, durante décadas, una persona en Argentina tenía un trabajo estable con el cual mantenía su casa y su familia, disfrutaba de ratos de ocio con sus amistades y difícilmente se hubiese sumado a una banda armada para asaltar a sus vecinos, porque implicaba poner en juego todo lo que tiene (Puccio, por ejemplo, era un marginal).

Sabe que debe acostarse y levantarse a determinada hora. Tiene su día prácticamente pautado: desayunar, llevar a sus hijos al colegio, ir a trabajar, volver, hacer las compras, etc. Pero además, la propia gente que lo rodea también está estructurada de esa forma y cada uno opera como un límite a su semejante. Es una disciplina social. ¿Y quién la impone? Los responsables de que todo eso pueda hacerse. Dicho en otros términos: el capital. Más allá de cualquier consideración, hay algo que está ordenando la vida.

En las últimas décadas, este sistema social ha dejado de ofrecer ese orden. El capital ha expulsado masas enteras de la producción y no les ha ofrecido ningún horizonte. Entonces, cuando se pierde esa estructuración, se rompen esas relaciones y aparecen otras, ligadas a negocios marginales en relación a la economía y con características muy poco estructuradas, más cercanas a una anarquía general, que recluta formal o informalmente elementos que se apartan de la clase obrera (se desclasas). Esos desclasados componen lo que se llama lumpenproletariado y es lo que ha crecido en el país en todo este tiempo: capas de la población que viven del delito, dentro y fuera del Estado, como un segundo Estado, un Estado “negro”. Son las barras bravas del fútbol, los que roban para la policía, los que trafican droga, participan de la trata de personas para prostitución, las patotas sindicales y políticas, etc. A su alrededor, un vasto mundo de jóvenes que se van arrojando al “sistema” delincencial.

Esa tendencia no se revierte aumentando o disminuyendo las penas o los efectivos, sino construyendo una nueva disciplina social. Un nuevo organizador de la vida y un horizonte para cada persona. Ya que el sector privado no puede, corresponde al Estado tomar a toda la población desocupada o subocupada, pero no para reproducir sus condiciones, sino para ponerla a producir. Eso, rápidamente, detiene la tendencia a la descomposición. Ese reclutamiento compite contra el del delito. Claro, eso también requiere “mano dura”: la disciplina laboral lógica y el ataque contra las organizaciones delictivas. Pero, también, de “mano blanda”: reeducar y reencauzar a aquellos elementos que puedan ser rescatados para una vida social plena. Un proyecto que ponga al país a trabajar realmente y, por lo tanto, requiera de cada uno de nosotros, es lo único que puede volver a recrear los lazos sociales, allí donde hacen falta. ¿Se va a terminar definitivamente la delincuencia? Seguramente no. Ninguna sociedad está exenta de eso. Pero sí, primero, evitar que siga creciendo a estos niveles y, segundo, disminuir su tamaño considerablemente: un país en el que sus habitantes ya no vivan en peligro; una sociedad que desarrolle mejores relaciones entre los seres humanos. Eso es lo que se propone Vía Socialista.

Gráfico 1: Cantidad de delitos y tasa de delitos cada 100.000 habitantes

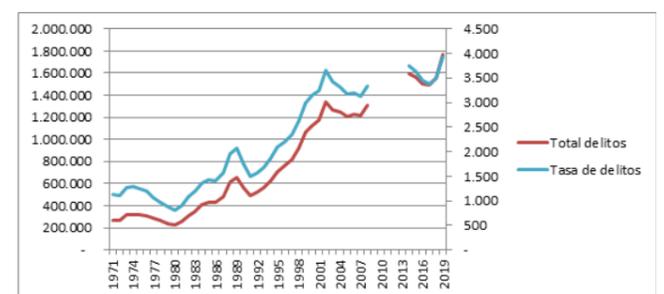
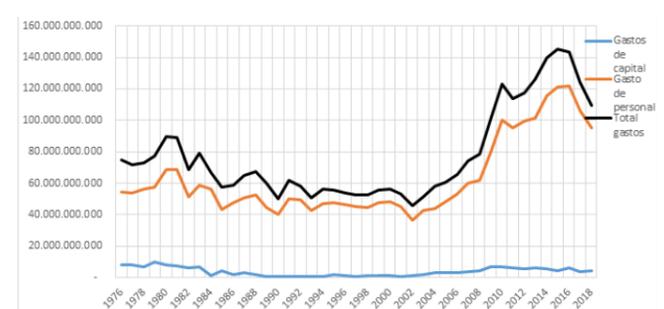


Gráfico 2. Evolución del presupuesto ejecutado por el Estado Nacional en Seguridad según naturaleza del gasto (1976-2018). Precios constantes 2019



Fuente: Elaboración propia sobre informes del Ministerio de Defensa.

Sin grietas en educación



Romina de Luca

Vía Socialista

Las pruebas Aprender 2021, una vez más, nos aportan datos sobre el crítico estado de la escuela argentina. Hoy, millones de chicas y chicos recorren la escuela primaria y, al terminar, 45 de cada 100 tendrán un nivel básico o por debajo del básico en matemáticas. Desde 2013, no para de aumentar el número de estudiantes que se encuentran por debajo del nivel básico, casi uno de cada cuatro estudiantes ocupa ese rango hoy, al concluir la primaria. Para lengua, aquello que revela la capacidad de lecto-comprensión, el número es similar: 44 de cada 100 estudiantes tienen nivel lector básico o por debajo del básico. Cuadro que empeoró circunstancialmente con la pandemia. Por si hubiera que destacarlo, leer y entender, es el cimiento sobre el que se erigen luego todo tipo de conocimientos: sociales, científicos, ciudadanos, prácticos. No tener comprensión lectora dificulta todo lo que viene después.

Lo cierto es que este cuadro no es nuevo. Hemos escrito sobre él hasta el hartazgo. Solo daremos algunos ejemplos de un cuadro de degradación persistente y, más importante aún, que trasciende el personal político de turno que gestiona de crisis en crisis. En 2013, 41% de las chicas y chicos de sexto grado de nivel primario tenían resultados básicos o debajo del básico en lengua, para 2007, el 33,7% de las y los estudiantes alcanzan resultados bajos y el 43,1% resultados medios. Si sumáramos las pruebas internacionales PISA multiplicaríamos los ejemplos. Todos ellos tienen un denominador común: el sesgo de clase. En efecto, las pruebas 2021, una vez más nos lo ilustran: siete de cada diez estudiantes de nivel socioeconómico bajo son los que tienen peor desempeño en nuestras escuelas. Un número que coincide con otro estructural: siete de cada diez infancias viven en condiciones de pobreza.

La inclusión del status quo

El principal problema de la escuela argentina se encuentra fuera de ella. La sociedad capitalista funciona abaratando sistemáticamente la fuerza de trabajo. ¿Cómo lo hace? La despoja de toda cualidad, reduciendo sus conocimientos a lo más elemental de la vida social: el obrero no necesita pericias, apenas apretar un botón, la máquina hará el resto. Ese proceso, va de la mano de otro: el enorme avance de la ciencia y de la técnica. Ese avance, innegable, solo aplica a una porción muy pequeña de la clase obrera. La lógica de la competencia hará que cada empresario busque abaratar más y más el valor de su fuerza de trabajo, en esa guerra de todos contra todos, que impone el capitalismo. Este cuadro, que afecta a toda sociedad capitalista y explica la tendencia a la crisis de la escuela en el mundo, se suma, localmente, a tendencias que se suman a la anterior y la agravan y generalizan.

En efecto, el capitalismo argentino es uno de los eslabones débiles de la cadena capitalista mundial. Su debilidad se

manifiesta en que, aun aumentando la productividad del trabajo, no alcanza el promedio mundial, razón por la cual, se gesta una enorme masa de población sobrante que no encuentra empleo. No se trata solo de degradación del trabajo, sino de un trabajo degradado y una masa de desocupados y subocupados en crecimiento acelerado. Esa masa se emplea en sectores de la economía que solo puede ofrecer “inclusión” intermitente, degradada, con procesos productivos que aprovechan y solo son rentables con esa degradación. Como consecuencia, para la gran mayoría de la clase obrera argentina, la educación no es necesaria para el capital que la emplea, mucho menos para el que no la emplea. La crisis de la educación de masas, o ese proceso de degradación que nos muestran hoy las Aprender, da cuenta de ese proceso que, como dijimos, se ubica fuera de la escuela: a pocos les va muy bien, a la mayoría le va pésimo.

Pero ¿y si la sociedad comenzara a planificar un desarrollo económico realmente “inclusivo” para saltar el abismo de atraso sistemático en el que está atrapado nuestro país? Sí, como con Argentina 2050 proponemos, se iniciara una transformación completa; si se eligiera el desarrollo de industrias estratégicas de alta tecnología -como la energía, una industria no agraria competitiva, por dar algunos ejemplos- si la planificación y racionalización social ordenara la vida, claro está, la escuela tendría otro lugar. Debería acompañar ese proceso de profundos cambios, implicaría la construcción de una escuela científica y sólida, la revisión de métodos y estrategias, de contenidos, de duración de la jornada escolar, de organización del trabajo docente, de equipos con especialistas para acompañar a cada estudiante. Sí, pero para eso hay que pensar a la escuela más allá del capital.

Esto no exime a las políticas educativas que, en efecto, pueden agravar el cuadro. Más aún cuando se encargan de convencer a los damnificados que son responsables de la degradación. El discurso progre señala que al ingresar nuevos sectores obreros a la escuela se debe revisar su formato antaño elitista o clasemediero. Lo que dicen, entonces, es que la clase obrera no puede tener una educación de calidad. No explican así la primarización completa de la educación secundaria hoy. Tampoco explican cómo la escuela primaria completamente masificada a inicios de los años cuarenta supo hacer otra cosa con esa misma clase obrera incluida. Hoy nuestras chicas y chicos transitan la escuela primaria, también la secundaria y ni siquiera aprenden a leer. Basta con ver los resultados. Un claro ejemplo de que cantidad -más años en la escuela- no es sinónimo de calidad (lo que la escuela logra que al egresar hagan). Cuando culpan a la clase obrera de estos resultados solo recurren a argumentos miserabilistas.

En realidad, es peor. No solo buscan convencer a los damnificados de su responsabilidad, sino que implementan políticas que consolidan el cuadro de origen. La descentralización educativa es eso: que cada provincia se haga cargo como pueda. Es esa realidad la que está detrás de resultados algo mejores -aunque no en todas las comunas- de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: es el distrito más rico del país, con familias con el mayor nivel educativo también

del país. Es la base material y no sus políticas educativas que se parecen mucho a las del resto del país.

También consolidan ese cuadro las medidas que, a nivel nacional, se anunciaron como antídotos para revertir los resultados de la Aprender: distribución de libros, conectividad y becas. Dificilmente se lean libros si no se puede primero leer, ni se aprovecharán equipos que no se sabe usar, ni nadie saldrá de la pobreza con una beca Progresar de 6.000\$ al mes. Tampoco lo lograremos con la implementación de una hora más de clases en escuelas que, dada su infraestructura, no sabrán cómo garantizar la medida luego del receso invernal. Sobre todo, porque lo que se impone y estructura el hecho educativo es la lógica del “permanecer”: que estén en la escuela, no sabemos muy bien para qué.

La grieta en el discurso

En este nuevo capítulo que aportaron las Aprender 2021, lo que sí resultó novedoso fue la respuesta del personal político de turno. Quienes hasta ayer discutían la validez de los resultados acumulados prueba tras prueba, cuando gestionaron del 2003 al 2015, salieron a reconocer los números del colapso. Lo hizo el mismo Sileoni, hoy a cargo de la cartera educativa de la provincia de Buenos Aires, quien durante su gestión nacional sostuvo frente a los malos resultados que “la calidad es muchas cosas”. Un reconocimiento que encontró otros dos chivos expiatorios: la pandemia y el macrismo, antes. Porque, mejor que la culpa no nos roce. Por su parte, Larreta y Acuña, representando al macrismo, culparon al cierre de escuelas. Soledad Acuña -de quien nos ocuparemos en próximos números- pidió que el gobierno nacional se haga cargo de la situación por no haber tenido el coraje de abrir las escuelas a tiempo y reclamó un plan.

Ellos hablan como si, de un lado y otro de la grieta del discurso, no hubieran gestionado las escuelas durante la pandemia. No aportaron recursos para que las familias pudieran garantizar la continuidad, ni contrataron docentes desocupados a tiempo -solo para programas tardíos, precarios y precarizantes-, ni asistieron psicológicamente a las familias y menores durante la pandemia, aún con trabajadores sociales por doquier, ni repartieron equipos que permanecieron en las escuelas o en las vidrieras de algún comercio esperando valorizarse como mercancía. Hablan también como si hoy no aplicarían las mismas recetas falsamente inclusivas. La ministra Acuña que pretende despegarse discursivamente acaba de establecer la aprobación por equivalencias en la escuela secundaria -aprobar un tramo superior valida los anteriores aun cuando no guarden relación temática-, porteñizando la lógica implementada antes por la Nueva Escuela Secundaria Rionegrina; estableció la promoción automática en el ciclo básico y que la progresión de aprendizajes anula promedio de calificación, entre otras medidas. Aplicando las mismas recetas pretenden ser diferentes...

Una vía al progreso

Las Aprender, las PISA, las TERCE seguirán acumulando evidencia en el mismo sentido. Resultados que muestran cómo tenemos una escuela donde millones son privados de una educación porque ésta es innecesaria al capital. Aun cuando se titulen, esa educación fue vaciada de contenidos, convertida en una falsa inclusión. Esa educación no puede asegurar una vida mejor.

Pero sí tenemos otra vía. Esa que se ligue el desarrollo de toda la sociedad y vincule a la escuela con ese proceso. Se trata, como dijimos, de pensar la educación más allá del capital. Fenómeno que tiene dos dimensiones. Por un lado, la construcción de esa vía socialista que deje de condenar a la humanidad al empobrecimiento y al embrutecimiento a la par que genera riquezas y conocimientos para una minoría. Por el otro, diseñar cuál es el mejor plan para recuperar aquí y ahora la escuela. Para eso, las y los estudiantes junto a las familias que padecen esta situación y reclaman por una mejor educación, la docencia que ve sometida su labor a la mera contención social, las y los especialistas tenemos que discutir qué métodos, qué filosofía pedagógica será la más eficaz para revertir este cuadro, cómo aplicarla, con qué fin, para construir qué tipo de escuela, para esa sociedad que desarrolle el progreso humano. Para todos, para nosotros, tenemos que elaborar una propuesta y otra vía es posible. Hay que encontrar el camino.



Ley de asociaciones profesionales: El sustento jurídico de la burocracia sindical.



Ianina Harari

Vía Socialista

El modelo sindical argentino está regulado por una ley cuyas características fundamentales datan de 1945, cuando Perón estatizó el movimiento obrero y subordinó a los sindicatos a su política. No es casual que desde entonces resulte excepcional el recambio político en las cúpulas sindicales. Desde mediados del siglo XX, el peronismo gobierna la abrumadora mayoría de sindicatos y la CGT. En general, cuando hay recambio de dirigentes, se trata de cambio de nombres que responden a una misma corriente o de una disputa entre fracciones de la burocracia. La perpetuación de la burocracia tiene como uno de sus fundamentos a la legislación sobre las asociaciones sindicales. La Ley de Asociaciones Sindicales, n° 23.551, fue sancionada 1988 bajo el gobierno de Alfonsín, pero sus postulados reproducen los del decreto n° 23.852, de 1945.

Distintas leyes, mismo espíritu

La primera reglamentación estatal de los sindicatos se produjo durante el gobierno militar de 1943, del que Perón fue partícipe. Esa norma nunca entró en vigencia, pero constituyó una muestra de la voluntad de comenzar a regimentar a las asociaciones obreras. Dos años después, Perón ocupaba la Secretaría de Trabajo y Previsión y emitió el decreto n° 23.852/45, que sentará las bases del modelo sindical argentino, el cual mantiene su vigencia hasta hoy.

La principal característica es lo que se conoce como “unicidad promocionada”. Este mecanismo implica que el Estado solo otorga reconocimiento formal a un solo sindicato por actividad u oficio, que es el autorizado para representar al conjunto de los trabajadores y participar de las negociaciones colectivas. Ese sindicato, y solo ese, cuenta con la personería gremial. Pueden existir otros sindicatos, pero solo obtendrán una inscripción simple, sin tener derecho a participar en las instancias de discusión con la patronal.

Durante las dos primeras presidencias de Perón, entre 1945 y 1955, se otorgaron la mayoría de las personerías gremiales. Los sindicatos que la obtuvieron no eran necesariamente quienes contaban con mayor cantidad de afiliados, es decir, los más representativos. Lo que definía el otorgamiento de la personería era la subordinación al peronismo. Con ello, se buscaba eliminar los sindicatos dirigidos por los comunistas. El éxito de la estrategia de la normativa que ideó Perón se

puede medir por la continuidad de los sindicatos que detentan la personería hasta el día de hoy.

La “Revolución Libertadora” buscó quebrar el poder del peronismo en los sindicatos, promoviendo la pluralidad sindical mediante el decreto n° 9.270/56. Unos años después, en 1958, Perón y Frondizi pactaron la restauración del modelo sindical anterior, lo que se plasmó en la ley n° 14.445. Al volver al poder, en 1973, el peronismo sancionó la ley n° 20.615, que buscó incrementar el poder de la burocracia sindical y blindarla para eliminar la disidencia interna. Esta nueva norma habilitó a las cúpulas sindicales a intervenir seccionales, filiales y comisiones internas.

La dictadura militar introdujo algunas modificaciones al modelo sindical, pero que no alteraban el núcleo del esquema anterior. En 1979, dictaron la regla estatal n° 22.105, que quitaba la personería gremial a la CGT y le sacaba a los sindicatos la administración de las obras sociales, privándolos de su principal caja. Bajo el gobierno de Alfonsín, en 1984, la Ley Mucci buscó que se reconociera la representación de las minorías en los sindicatos, pero la norma no prosperó por oposición del peronismo. En 1988, se sancionó la ley n° 23.551, que rige hasta hoy, en donde se consagró el modelo sindical de unicidad promocionada.

Como vemos, los intentos radicales y militares de modificar el modelo sindical solo buscaban debilitar al peronismo. Lejos de defender los intereses obreros y preocuparse por la democracia sindical, buscaban sacar ventaja de una disputa interburguesa. En cambio, no hubo ningún intento por izquierda de desarticular los fundamentos legales del poder de la burocracia sindical peronista.

El monopolio sindical: una carta peronista

Como mencionamos, el modelo sindical argentino se basa en el concepto de monopolio sindical. Se trata de una idea que, en abstracto, parece destinada a fortalecer las organizaciones corporativas de la clase. Al haber un solo sindicato por actividad, se evita la dispersión frente a la unidad de la patronal. La ley no impide la existencia de más de un sindicato, pero solo uno ostentará la representación del conjunto de los trabajadores de la actividad u oficio. A su vez, será el que maneje la obra social.

Ahora bien, esta idea tiene varios problemas. El primero de ellos consiste en que originalmente las personerías no fueron entregadas a quienes contaban con mayoría de afiliados. El

segundo tiene que ver con que no se garantizan mecanismos para la disputa por la personería gremial se lleve a cabo. Por ley, el sindicato que quiera disputar la personería a otro que ya la tenga, tiene que demostrar que una cantidad de afiliados mayor durante seis meses. Pero no hay ningún elemento que obligue al sindicato que ya tiene la personería a presentarse a la compulsa de afiliados. Así, simplemente con no presentarse a las compulsas, el sindicato que tiene la personería gremial puede mantenerla eternamente. Esa es, por ejemplo, la estrategia que utiliza la UTA para mantener la representación de los trabajadores del subte.

La democracia sindical

El modelo sindical argentino no fue pensado en pos de fortalecer a la clase obrera y sus organizaciones sindicales, sino por el contrario, se buscó que el Estado pudiera controlarlas. Así, el peronismo logró contar con un arma para disciplinar a la clase obrera que le fue útil hasta el día de hoy. La perpetuación de la burocracia sindical peronista muestra el éxito de esa estrategia, que estuvo al servicio de sostener la hegemonía burguesa.

Hay dos mecanismos principales por los cuales el modelo sindical permite la perpetuación de la burocracia. Por un lado, la dificultad para disputar la personería gremial angosta las posibilidades de discutir con la burocracia peronista desde afuera de los sindicatos. Por el otro, la competencia interna también se ve obstaculizada. Como vimos en una nota anterior (véase El Aromo n° 1 –Segunda época), la normativa no contempla ningún mecanismo que garantice la democracia interna.

Para obtener mayores niveles de democracia sindical dentro de la legalidad burguesa, es necesario reformar la legislación. Hacen falta garantías para la compulsa de afiliados, que obligue a los sindicatos a presentar periódicamente la cantidad de aportantes. Por otro lado, se debe dar lugar a la representación de todos los sindicatos en las paritarias, tal como sucede en el Estado. Cada sindicato debe sostenerse con los aportes voluntarios de sus afiliados, por lo que cualquier aporte compulsivo de los no afiliados debe ser eliminado. Así, cada trabajador podrá elegir libremente qué sindicato quiere que lo represente. Por otro lado, como ya mencionamos, deben existir garantías a la democracia interna en los sindicatos. Hoy en día, con sindicatos totalmente desprestigiados, la participación de la clase obrera en la vida sindical es muy baja. Una mayor democracia sindical puede restablecer la confianza en los sindicatos como herramientas de defensa de los intereses obreros y dar un impulso a la lucha.



¿Demasiadas decisiones?

Ernest Mandel: *En defensa de la planificación socialista*

Contrariamente a lo que los “libertarios” actuales creen, el tema de la complejidad de la planificación de una sociedad avanzada, con millones de insumos y decisiones de consumo, es objeto de discusión de muy vieja data entre los marxistas. La preocupación, entre los socialistas, no proviene de las banalidades sobre el tema de un Von Mises, sino de los problemas concretos enfrentados por las experiencias socialistas. De allí que hay un intenso debate entre socialistas en torno al papel del mercado en la asignación de recursos y su valor para una economía socialista. En este breve recorte de un texto mayor, Ernest Mandel esboza su crítica contra Alec Nove, que planteaba la necesidad de una economía mixta, donde el mercado ocupara un rol importante, precisamente, para resolver el “problema” de las “decisiones infinitas” imposibles de abordar por un planificador central.

Dirijamos ahora nuestra atención sobre algunas de las objeciones que Alec Nove erige contra lo que supone es la concepción marxista clásica de la planificación socialista. Basándose en su amplio conocimiento de la economía soviética, argumenta que probablemente hay en la URSS alrededor de doce millones de distintos tipos de bienes en producción, en todo momento, y que sólo el mercado puede realizar la función de asignarlos racionalmente -el número de decisiones a ser tomadas es sencillamente demasiado grande como para que pueda ser conducida por algún tipo de asociación democrática de los productores. ¿Qué debemos hacer con este razonamiento? Clarifiquemos primero una ambigüedad en su seno. El perfil trazado por Nove incluye un número inmenso de bienes intermedios y componentes parciales, así como tipos especiales de equipamiento, que el ciudadano común nunca encuentra y nunca consume. También comprende una gran variedad del mismo tipo de bienes. Estos comprenden, en las sociedades occidentales, de diez tipos diferentes de detergentes a treinta variedades de pan, y así sucesivamente. El común de la gente sólo consumirá regularmente una o dos de estas variantes, no todas ellas. Una advertencia sobre esto es importante para circunscribir la dificultad con las que se enfrenta Nove. Porque, de hecho, no sucede

que el mercado, en las sociedades capitalistas avanzadas, “asigne” millones de mercancías, tanto bienes de consumo como de producción. En el caso extremo, los consumidores particulares pueden comprar unos pocos miles de distintos bienes en el curso de todo su ciclo de vida (aún esto sería para muchos de ellos una estimación exagerada). No tienen tiempo para consumir “millones” de bienes, o para responder a las “señales del mercado” en su “elección”. La noción de que existen “necesidades ilimitadas de consumo”, cuya satisfacción requiere un “número ilimitado de bienes” -alimentada por economistas liberales, y en su momento por Stalin-, es sencillamente disparatada. No se puede consumir un número ilimitado de bienes en un tiempo limitado, y, desafortunadamente, ¡nuestra estadía en la Tierra es absolutamente limitada!

La situación no cambia si uno se refiere a los bienes de producción (incluyendo a los productos intermedios). El grueso de los bienes intermedios, como lo hemos notado, no son asignados en modo alguno por el mercado. Son hechos por encargo. Esto es suficientemente obvio. Pero -lo que es menos advertido- lo mismo es cierto hoy para las más grandes máquinas. No se va a los supermercados a comprar turbinas hidroeléctricas para represas; se las ordena con especificaciones muy precisas y detalladas. Aún si se hace

a través de una licitación pública, no es de ningún modo lo mismo que la “asignación vía mercado”. A los distintos licitatorios no se les permite hacer productos diferentes, entre los que se elige. Solo se les permite hacer un solo producto el cual es automáticamente utilizado. El mismo procedimiento puede ser obviamente seguido sin que se introduzca ningún principio de mercado. (...)

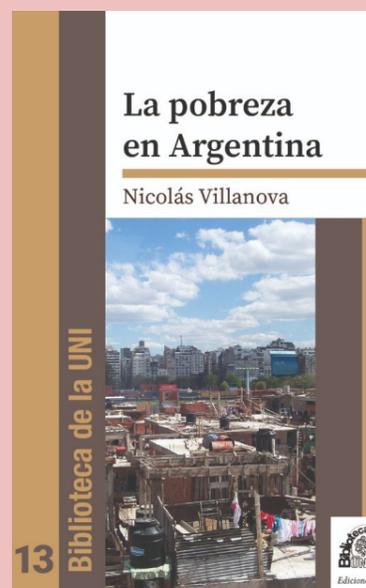
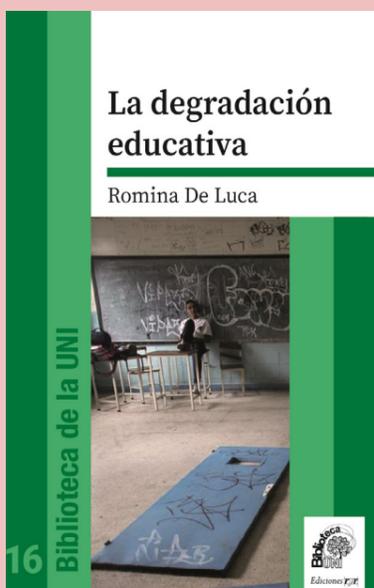
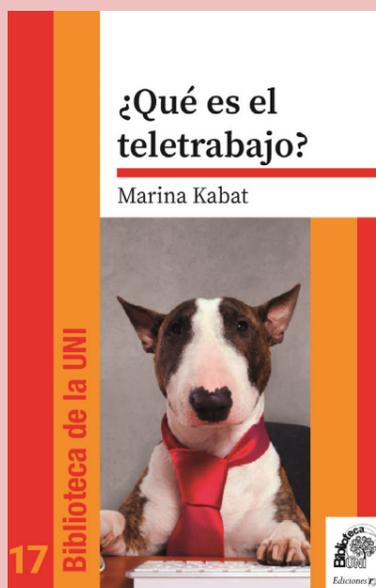
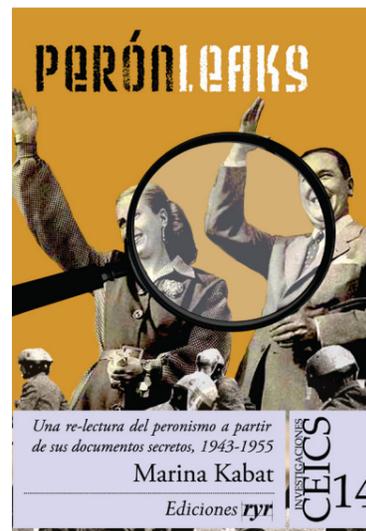
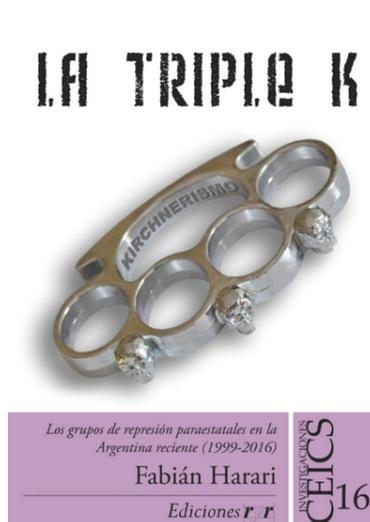
Arribamos entonces a una conclusión sorprendente. Ya hoy -en los países capitalistas más avanzados-, el grueso de los bienes de consumo y de producción no es de ninguna manera producido en respuesta a las “señales del mercado”, que cambian violentamente de año en año, más aún, de mes en mes. El grueso de la producción en curso corresponde a patrones establecidos de consumo y a técnicas de producción predeterminadas que son ampliamente, si no completamente, independientes del mercado. ¿Cómo ha sucedido esto? Es precisamente resultado de la creciente socialización objetiva del trabajo.

¿Por qué el problema de asignar los recursos necesarios para estos productos -que son ampliamente conocidos con anticipación- no puede ser solucionado por los productores asociados, con la ayuda de modernas computadoras que sin duda pueden manejar las “millones de ecuaciones” que Nove encuentra tan intimidatorias?

Ediciones ryr

Accedé al catálogo completo: <https://edicionesryr.com.ar/catalogo/>

INVESTIGACIONES
CEICS



Descargá el libro con el programa de Vía Socialista

<https://viasocialista.com.ar/category/argentina-2050/?fbclid=IwAR-2FelKZ0uV0Db34x8uSkMO4SsT-L9oUkUNmrjXSAWDzTKXTneIoOe-K8UQIc>



Seguinos en redes



[Vía Socialista](#)



[@viasocialista](#)



[@viasocialistaarg](#)



[/VíaSocialista](#)